

CA de Santiago

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que a folio 1 comparece don Tomás Aylwin Arregui, abogado en representación convencional de Importadora Handicraft Galleria Limitada, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 18.410, deduce reclamación de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por la dictación de la Resolución Exenta N° 15.250, de fecha 13 de diciembre de 2022, la que le fuera notificada el día 28 de dicho mes y año, dictada por la Superintendencia indicada, mediante la cual se le impuso a su representada una multa de 185 UTM.

Solicita se acoja el reclamo, declarando ilegal dicha resolución, dejando sin efecto la multa, con costas. En subsidio, se rebaje el quantum de la multa al mínimo legal, se aplique únicamente la sanción de amonestación por escrito o absolución total.

Explica que los cargos formulados en su contra mediante Oficio Ordinario N° 138.850 de fecha 22 de septiembre de 2022, por infracción a lo establecido en el artículo 27° letra a) del Decreto Supremo N°298 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo al artículo 3° N°14 de la Ley N°18.410, lo que dice relación con la comercialización de productos eléctricos sin contar con su correspondiente certificado de aprobación vigente, y sin sus respectivos marcados de seguridad visibles al público. Lo anterior, en razón de que las fichas técnicas de las pistolas de pegamento marca Guayaquil, modelo PE10WI y PE10W, se encuentran con la obligatoriedad de certificación, que el Certificado de aprobación N°E-013-04-2751 del 7 de noviembre de 2013 con el que contaba su representada, no ampara a los productos fiscalizados, y que, el sello QR N°0000000096481 de la pistola de pegamento de 10W, modelo COD 208-203 y el sello QR N°0000000018175 de la pistola de pegamento marca Guayaquil, no corresponden, al no tener certificado de aprobación vigente.

Señala que en relación a los cargos formulados en su contra mediante Oficio Ordinario N° 138.850, no se formularon descargos.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXXSXMGBXBP

Agrega que la resolución que se reclama carece de toda fundamentación, toda vez que el certificado de aprobación no se requiere para el producto fiscalizado, además de una serie de vicios procedimentales que se evidenciaron en la fiscalización, tales como que la acción sancionatoria se encontraría prescrita conforme el artículo 86 de la Ley 20.529, cuyo límite es de 6 meses, en tanto que en la especie, transcurrieron más de 10 meses entre la ocurrencia de los hechos y la formulación de los cargos, que durante el procedimiento seguido en contra de su representada no se habría observado el debido proceso, que la resolución impugnada vulneraría el principio de congruencia y el de tipicidad, pues se trata de productos cuya tensión nominal es inferior a los 250 V y son productos destinados exclusivamente a fines industriales, no siendo procedente a su respecto el certificado de aprobación vigente exigido por la administración, por lo que no existe infracción.

**Segundo:** Que a folio 22 informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando que la acción de reclamo deducida sea desechada en todas sus partes por carecer de sustento tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

Indica que la reclamación se ejerce respecto de la Resolución Exenta N°15250 de 13 de diciembre de 2022, que sancionó a la reclamante con multa de 185 UTM, por la comercialización sin previa certificación de seguridad de pistolas de pegamento, contraviniendo el artículo 27 letra a) del Decreto Supremo N° 298/2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, en relación con el artículo 3 N°14 de la Ley N°18.410.

Agrega que dicha resolución es el corolario del proceso administrativo iniciado el 27 de enero de 2022, cuando se requirió información a la reclamante por 68.424 pistolas de pegamento que había importado entre agosto y noviembre de 2021, respondiendo ésta que se comercializaban con el certificado de aprobación N° E-013-04-2751, de fecha 07 de noviembre de 2013, siendo imposible amparar dichas cantidades al emitirse el certificado antes de la importación, por lo cual la SEC formuló cargos por comercializar sin previa certificación. Al no haberse formulado descargos, el 13 de diciembre de 2022 se sancionó con multa de 185 UTM.



Agrega que de acuerdo al artículo 3 N° 14 de la Ley N°18.410, en Chile no se pueden comercializar artefactos, sin previa certificación del organismo autorizado por dicha institución que asegure el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, siendo una infracción administrativa la comercialización, sin previa certificación, según el artículo 27, letra a) del Decreto Supremo N°298/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Asimismo, y de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo antes citado, las partidas importadas vinculadas a un modelo que cuenta con certificado de aprobación, deben someterse a seguimiento, realizándose ensayos críticos a unidades elegidas aleatoriamente, para ampliar el alcance de la certificación y así quedar amparadas las unidades con este. En consecuencia, sin certificados de seguimiento sobre las partidas importadas, no es posible sostener que los artefactos cuenten con certificados de aprobación.

Refiere que en este país se encuentran con obligatoriedad de certificación los artefactos sometidos al sistema nacional de certificación, luego, las pistolas de pegamento mediante la Resolución Exenta N°40/2006 del MINECON se incorporó al sistema de certificación, emitiéndose para dichos efectos el protocolo N°PE1-25:2007, donde se establece que su ámbito de aplicación será el establecido en la Norma IEC N°60335-2-45, es decir, aplicable a herramientas calefactoras eléctricas y aparatos similares cuya tensión asignada no sea mayor que 250 V.

Hace presente que de acuerdo con el artículo 17 bis de la Ley 18.410 la Superintendencia puede perseguir infracciones hasta tres años de su ocurrencia, en consecuencia, en ningún caso ha operado alguna restricción relativa al transcurso del tiempo para impedir la aplicación de un reproche por los hechos investigados, respecto de los cuales se dio estricto cumplimiento al debido proceso, la descripción de cargos es clara y precisa, y el incumplimiento fue manifiesto. Agrega que no es posible sostener que se trate de productos con fines industriales, cuando la propia ficha técnica del producto, lo indica para trabajo ligero y manualidades.

Finaliza indicando que de acuerdo al artículo 15 de la Ley del ramo, una infracción es leve cuando no califica como grave o gravísima, como



ocurre en la especie, y la multa máxima que es posible imponer es de 6.000 UTM, por lo que la de 185 UTM finalmente impuesta por la comercialización de 68.424 unidades de pistolas de pegamento que no han sido evaluadas en sus estándares de seguridad, que han ingresado al mercado, y se han puesto en contacto con las familias, especialmente menores, exponiéndose la integridad física de estos últimos mediante miles de artefactos peligrosos sin certeza de una seguridad mínima tolerable por nuestra regulación, no parece desproporcionada.

**Tercero:** Que a folio 37, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informa que la multa motivo de la presente reclamación se encuentra pagada.

**Cuarto:** Que el presente reclamo se sustenta en lo establecido en el artículo 19 de la Ley 18.410 que autoriza a cualquier afectado por una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para impetrarlo cuando estime que determinada resolución “*no se ajusta a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponde aplicar*”. Por consiguiente, esta Corte debe revisar si la decisión controvertida adolece de alguna ilegalidad -procesal o de fondo- esto es en la sustanciación del procedimiento administrativo seguido y la determinación de la autoridad de control.

**Quinto:** Que, en síntesis, el acto reclamado emanado de la autoridad administrativa, corresponde a la Resolución Exenta N°15250, de fecha 13 de diciembre de 2022, que sancionó a la reclamante con multa de 185 UTM, por la comercialización sin previa certificación de seguridad de pistolas de pegamento, contraviniendo el artículo 27 letra a) del Decreto Supremo N° 298/2005 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, en relación con el artículo 3 N°14 de la Ley 18.410.

**Sexto:** Que no existiendo desconocimiento del supuesto fáctico de la sanción aplicada, esto es, la importación de 68.424 pistolas de pegamento entre agosto y noviembre de 2021, sin el certificado previo de aprobación, refiere la reclamante, por una parte, que sí contaba con el certificado de aprobación N° E-013-04-2751, de 7 de noviembre de 2013, para su comercialización, y que en la especie, al referirse a artefactos de uso



exclusivamente industrial, no sería necesario el certificado de aprobación exigido por la autoridad sectorial.

**Séptimo:** Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º numeral 14 de la Ley N°18.410, corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: *“Autorizar a organismos de certificación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control para que realicen o hagan realizar bajo su exclusiva responsabilidad las pruebas y ensayos que la Superintendencia estime necesarios, con el objeto de otorgar un certificado de aprobación a los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas, combustibles líquidos, y los que utilicen leña y otros productos dendroenergéticos como medio de combustión. La Superintendencia fiscalizará el debido cumplimiento de las funciones asignadas a los organismos, laboratorios o entidades autorizadas de acuerdo a este número y mantendrá un registro de las mismas.*

*Los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que, de conformidad con la normativa vigente, deban sujetarse a la certificación prevista en el párrafo anterior, no podrán comercializarse en el país sin contar con el o los respectivos certificados y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser ésta exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del decreto ley N° 2.224, de 1978. Tratándose de artefactos que utilicen como combustible leña y otros productos dendroenergéticos, los correspondientes certificados deberán, además, acreditar el cumplimiento de las normas de emisión dictadas en conformidad al artículo 40 de la ley N° 19.300 o al artículo 44 de la misma ley. Para estos efectos, el Ministro de Energía se considerará uno de los ministros competentes o sectoriales.*

*Cumplidos con los requisitos establecidos por la Superintendencia, deberán integrar el registro a que se refiere el inciso primero todos aquellos organismos de certificación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control nacionales e internacionales. Dichos organismos, laboratorios o entidades se mantendrán en el registro sólo mientras cumplan con los referidos requisitos.*

*La Superintendencia podrá retirar del comercio, con el auxilio de la fuerza pública, la totalidad de los materiales o productos de cualquier procedencia que, estando obligados a obtener certificado de aprobación y la respectiva etiqueta, sean comercializados en el país sin contar con aquellos.*

*El certificado de aprobación dará derecho al uso de un distintivo en los productos respectivos. El uso indebido de éste será sancionado de conformidad a esta ley.*



*Los certificados de aprobación emitidos por los organismos autorizados de conformidad con este número, relativos a los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas, combustibles líquidos, y los que utilicen leña y otros productos dendroenergéticos como medio de combustión, deberán acreditar que cumplen con los estándares de seguridad, eficiencia energética, calidad y emisiones que fijen los organismos competentes en cada una de estas materias”.*

De la norma antes transcrita se desprende que no se pueden comercializar productos sometidos al sistema nacional de certificación de productos eléctricos y de combustibles, sin encontrarse amparado por un certificado de aprobación.

Por su parte, el Decreto Supremo N° 298/ 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Certificación, complementa lo anterior, fijando en el artículo 27 letra a) como infracción administrativa el comercializar productos sin su respectivo Certificado de Aprobación.

En relación con la materia, la Resolución Exenta N°40/2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, teniendo como principales consideraciones la necesidad que los productos eléctricos de uso masivo, utilizados preferentemente por usuarios no calificados, cumplan con los requisitos mínimos de seguridad de las personas y cosas y que existe normativa internacional IEC (International Electrotechnical Comission); incorpora como productos eléctricos que deben contar con certificado de aprobación para su comercialización a las pistolas de pegamento, según el protocolo contenido en Norma IEC N°60335-2-45, sobre seguridad de las herramientas calefactoras eléctricas y aparatos similares, cuya tensión asignada no sea mayor de un voltaje de 250 V, cuyo es el caso de los productos importados por la reclamante.

**Octavo:** Que, en estas circunstancias, de los antecedentes fácticos, como del marco normativo aplicable a la materia se advierte que la autoridad recurrida actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, al dictar la resolución N° 15250 de 13 de diciembre de 2022 -que por esta vía se impugna- por la que sancionó a la reclamante con multa de 185 UTM por incurrir en la infracción de comercializar los productos de que se trata, sin contar con el correspondiente Certificado de Aprobación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXXSXMGBXBP

De manera que no se advierte en tal proceder vulneración alguna a aquellos aspectos que echa de menos la reclamante, debiendo destacarse que se está ante un reclamo de ilegalidad, lo cual supone haber actuado contra ley, infracción que no se advierte en el acto administrativo cuestionado, ni en el proceso llevado a cabo y que culminó con su dictación, por cuanto el proceder de la autoridad administrativa reclamada se ajustó a la normativa vigente y contiene los motivos fácticos y jurídicos que las justifican.

A lo anterior, cabe agregar que la reclamante si bien invoca afectación al debido proceso, no indica de qué modo esto habría ocurrido y que habiendo tenido la posibilidad de formular sus descargos ante las imputaciones efectuadas por la autoridad administrativa, decidió no hacerlo. Tampoco desarrolla las acusaciones de falta de congruencia ni esta se advierte del mérito del proceso, el cual da cuenta de una coherencia entre las imputaciones y cargos formulados, el debate y la decisión del asunto y la calificación jurídica de los hechos.

**Noveno:** Que, en relación a la prescripción alegada por la reclamante, fundada en que habrían transcurrido más de diez meses desde la ejecución u ocurrencia de los hechos y la notificación de la formulación de cargos, debe primeramente tenerse en consideración que la prescripción de las acciones para perseguir infracciones administrativas, así como las sanciones administrativas que deriven de estas, se deben someter a lo dispuesto en las leyes que las establezcan. De manera que encontrándose regulada la situación materia de debate en el artículo 17 bis de la Ley N°18.410, que estatuye que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos tres años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada, no resulta procedente aplicar la disposición que invoca la reclamante, esto es, el artículo 86 de la Ley N°20.529, que rige para el ámbito de la educación y de la autoridad controladora de dicho sector.

De acuerdo a lo anterior y aplicando la norma pertinente se concluye que no ha transcurrido el plazo que contempla la ley para perseguir y sancionar la conducta de la reclamante por los hechos materia de autos.



**Décimo:** Que en lo atinente a la sanción, cabe señalar que la aplicada resulta acorde con las infracciones constatadas, las que califican de leve y su *quatum* se ajusta a los márgenes que la ley estatuye, habiéndose tenido en consideración las circunstancias del artículo 16 de la Ley N°18.410, como la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; el porcentaje de usuarios afectados por la infracción (ingreso al mercado nacional de 68.424 unidades de pistolas de pegamento, sin estar previamente certificadas y sin conocer el estándar de seguridad de los productos peligrosos que comercializa) y el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación; la conducta anterior de la empresa y su capacidad económica; todo lo cual descarta la desproporcionalidad y falta de fundamentación alegadas.

**Undécimo:** Que, conforme a lo razonado, cabe descartar la existencia de las ilegalidades o arbitrariedad denunciadas, en el actuar y en la decisión de la autoridad administrativa por lo que el recurso intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en la Ley N°18.840 y su reglamento, se decide que:

1. Se **rechaza, sin costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por Importadora Handicraft Galleria Limitada, en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

2. El monto consignado para reclamar de la multa, en atención a lo informado a folio 37, de encontrarse actualmente pagada, deberá ser restituida a la reclamante, una vez firme y ejecutoriado el presente fallo. Gírese cheque en su oportunidad.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

**Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.**

**Contencioso Administrativo Rol Corte N° 32-2023**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXXSXMGBXBP





Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXXSXMGBXBP

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jenny Book R., Carolina S. Brengi Z. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXXSXMGBXBP